

## **Prescripción de los tributos municipales periodos 2012 y 2013 por aplicación del Código Civil**

PARTE/S:	Municipalidad Gral San Martín c/ Estado Nacional Argentino s/ejecución fiscal
TRIBUNAL:	Cám. Fed. San Martín
SALA:	I
FECHA:	29/05/2023
JURISDICCIÓN	Buenos Aires

---

San Martín, 29 de mayo de 2023.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la resolución de fecha 08/03/2023, mediante la cual la Sra. juez "a quo" desestimó las defensas de inhabilidad, falsedad de título y pago; e hizo lugar parcialmente a la de prescripción por los períodos enero 2015 a febrero 2016, mandando llevar adelante la ejecución en relación a las sumas reclamadas, más los intereses legales, con costas a la accionada vencida.

Para así decidir y a lo que aquí interesa, tuvo en consideración que la fecha interruptiva de la prescripción, teniendo en cuenta que el período más antiguo reclamado databa del mes de enero de 2015 y la presente ejecución fue iniciada con fecha 23/03/2021 (Conf. movimientos históricos Lex 100), por lo que los períodos reclamados que iban desde el período marzo del año 2016 precitado hasta diciembre de 2019 incluido, no se encontraban prescriptos, por lo que correspondía mandar llevar adelante la ejecución por dichos períodos, con costas a la accionada.

Bajo tal inteligencia, refirió que respecto de los períodos que iban desde enero de 2015 a febrero de 2016 incluidos, el plazo de prescripción de cinco años establecido por ley habría operado, por lo que correspondía respecto de ellos hacer lugar a la prescripción en forma parcial, con costas a la actora.

II.- Se agravió la ejecutante al considerar que, la fecha de inicio de las presentes actuaciones – que fuera indicada en la resolución en crisis- resultaba a todas luces errónea, lo cual podía constatarse fácilmente de su compulsa, datando la fecha correcta del 28 de diciembre de 2018 (Conf. primera actuación y fecha consignada en el escrito de inicio por la Receptoría de los Juzgados Federales en lo Civil y Contencioso Administrativos de General San Martín).

Sostuvo que, se reclamaba a la demandada la deuda por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos por los períodos no prescriptos desde el mes de enero de 2012 hasta octubre de 2018, conforme los certificados de deuda (títulos ejecutivos) acompañados oportunamente y no desde enero de 2015, como se mencionaba en la resolución apelada.

Agregó que, era de aplicación lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto- Ley Nro. 6.769/58), que en su Art. 278 (texto según Ley 12.076) se estableció que las deudas de los contribuyentes que habían incurrido en mora en el pago de impuestos, tasas y cualquier otra especie de contribuciones adeudadas a la municipalidad, prescribían a los cinco (5) años de la fecha en que debieron pagarse.

Señaló, que de conformidad con las sucesivas Ordenanzas Fiscales e Impositivas dictadas por la Municipalidad de General San Martín a estos efectos, no se había desconocido el hecho de que el año fiscal coincidía con el año calendario.

Agregó que, la presente demanda se había fundado en lo dispuesto por la Ley local 13.406, en tanto había establecido el procedimiento para el cobro judicial de los créditos fiscales por tributos, sus accesorios y sus multas de la Provincia o municipalidades contra sus deudores y responsables.

Por último, dijo que la prescripción interpuesta debía ser rechazada en su totalidad con expresa imposición de costas, pues a la fecha de inicio de las presentes actuaciones (28/12/2018) no había transcurrido el plazo de cinco (5) años dispuesto por las normas citadas para los períodos incluidos en los Certificados de Deuda que se ejecutaban.

El traslado de dichos fundamentos fue replicado por la accionada (vid constancia digital de fecha 17/04/2023).

III.- Ante todo, cabe señalar que no es obligación examinar todos y cada uno de los argumentos propuestos a consideración de la Alzada, sino sólo aquéllos que sean conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivos para la solución del caso (Fallos: 310:1835, 311:1191, 320:2289, entre otros).

IV.- Ello así, cabe recordar que "la finalidad de la prescripción reside en la conveniencia general de concluir situaciones inestables y dar seguridad y firmeza a los derechos, aclarando la situación de los patrimonios ante el abandono que la inacción del titular hace presumir (Fallos 313:173; 318:1416); y que la prescripción constituye, por un lado, una sanción para el negligente, para quien permanece inactivo (Fallos: 312:2352) y, por otro lado, un medio de liberación del deudor por el transcurso del tiempo fijado por la ley, que, por esa circunstancia, sirve a la seguridad jurídica en tanto determina la estabilidad de los derechos" (Conf. Cám.Cont.Adm.Fed., Sala I, causa 10.007/2008, Rta. el 29/06/2017 y sus citas).

V.- En la especie, resulta oportuno señalar que la presente ejecución fue iniciada el 28/12/2018 por la Municipalidad de San Martín contra el Estado Nacional, reclamando el cobro de \$ 13.667.578,19 en concepto de "Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos", con más recargos, multas e intereses, por los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y (1 al 10) 2018 y que, por su parte, la demandada opuso -entre otras defensas- la excepción de prescripción con fundamento en el Art. 2562, Inc. c) del CCCN y, subsidiariamente, planteó la prescripción quinquenal (vid constancias digitalizadas).

Ahora bien, no puede obviarse señalar que, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo reiteradamente que la prescripción de las obligaciones tributarias locales, tanto en lo relativo a sus respectivos plazos, como al momento de su inicio y, a sus causales de suspensión e interrupción, en virtud de lo dispuesto por el Art. 75, Inc. 12 de la Constitución Nacional, se regían por lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República, puesto que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho y, en consecuencia, las legislaturas locales no se hallaban habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo (Confr. "Filcrosa" -Fallos: 326:3899-, doctrina reiterada en precedentes posteriores -Fallos: 332:616, entre otros-; CSJN, Causa M. 804.XLVIII, "Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/ Herrmann, Alejandro Enrique s/ apremio" -Consid. 6º-, Rta. el 11/02/2014, entre otros y esta Sala, en causa "Municipalidad de Morón c/ Estado Nacional - Ministerio de Educación de la Nación s/ Ejecución Fiscal - Varios", FSM 17090432/2008/CA1, Rta. el 16/08/2017, entre otras).

También, el Alto Tribunal entendió que, si las provincias no tenían competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso Nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que éste fijó su cómputo (Confr. dictamen de la Procuradora Fiscal, al que la CSJN remitió en Causa F.391.XLVI, "Fisco de la Provincia c/ Ullate, Alicia Inés s/ ejecutivo", Rta. el 01/11/2011 y esta Sala I, causa citada).

Más recientemente, el Máximo Tribunal ha dicho que no podía soslayarse que: "el 1º de agosto de 2015, entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la ley 26.994 (art. 1º de la ley 27.077), ordenamiento que –en lo que aquí concierne- estableció normas relativas a la aplicación intertemporal de las leyes (arts. 7 y 2537) y produjo reformas significativas en cuanto a la prescripción contemplada en su Libro Sexto, que consistieron en reducir ciertos plazos y facultar a las legislaciones locales a regular el plazo de la prescripción liberatoria en materia de tributos (cf., en especial, arts. 2532; 2560; 2562, inciso c, del nuevo ordenamiento y arts. 3º; 4023 y 4027, inciso 3º y 4051 del Código Civil en su anterior redacción)" y, agregó que, sin embargo, los hechos no debían ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial de la Nación ni sobre el principio de aplicación inmediata de la nueva ley cuando se estaba "en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por las partes en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (confr. doctrina de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757, 'Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires' Fallos 338:1455, considerando 5º), conduce a concluir que el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado el Tribunal" (Cfr. Fallos: 342:1903, entre otros).

Así las cosas, y siendo que en el "sub examine" se ejecutan deudas en concepto de "Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos" que, conforme surge de los certificados de deuda acompañados, se dividen en períodos mensuales, debe estarse –en relación al tramo correspondiente al período 2012, 2013, 2014 y 1 a 7 2015- al principio sentado en el Art. 3956 del viejo Código Civil, en cuanto establecía que: "la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación".

En virtud de lo señalado, el punto inicial del curso de la prescripción se situaba en la fecha de vencimiento de cada uno de ellos, que era el momento en el cual debieron ser abonados y a partir de donde el municipio estaba en condiciones de hacer valer su derecho (Conf. esta Sala I, causa citada).

En virtud de lo señalado, el punto inicial del curso de la prescripción se situaba en la fecha de vencimiento de cada uno de ellos, que era el momento en el cual debieron ser abonados y a partir de donde el municipio estaba en condiciones de hacer valer su derecho (Conf. esta Sala I, causa citada).

Por los fundamentos dados, este Tribunal entiende que le asiste razón –parcialmente- a la apelante, toda vez que los plazos de prescripción de los períodos 2014 y 1 a 7 2015-, computados a partir de la fecha de cada vencimiento mensual, a la fecha de inicio de la acción (28/12/2018), no se encontraban prescriptos.

Distinta solución corresponde dar a los períodos 2012 (1 a 12) y 2013 (1 a 12), toda vez que los plazos de prescripción de ellos, computados a partir de la fecha de cada vencimiento mensual, a la fecha de inicio de la acción (28/12/2018), se encontraban prescriptos.

VI.- Ello así, el Código Civil y Comercial de la Nación entró en vigencia el 01/08/2015 y, reprodujo –en lo sustancial- el Art. 3 del Código Civil derogado, razón por la cual rigen los principios de irretroactividad y de aplicación inmediata de la ley; esto significa que la nueva norma se aplica "ex nunc", pudiendo comprender los

tramos de situaciones o relaciones jurídicas que no estaban abarcados por la noción de consumo jurídico (Conf. esta Sala I, causa citada).

De modo que, la nueva ley podía tener operatividad en tanto las consecuencias no estuviesen consolidadas durante la vigencia de la legislación anterior. Tal el caso de los periodos en análisis –del 8 al 12 del año 2015, 2016, 2017 y 1 a 10 de 2018-, cuya exigibilidad tuvo lugar con posterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

En tales circunstancias, debe atenderse a que el Art. 2532 de dicho cuerpo legislativo estableció que: “En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos” y, a su vez, el Art. 2560 determinó que: “El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local”.

Motivo por el cual, y ante la falta de impugnación en relación a la validez constitucional de las normas citadas, cabe concluir que la decisión del legislador nacional fue reconocer el carácter local de la prescripción de los tributos de esa naturaleza, permitiendo a los ordenamientos locales legislar respecto de su plazo prescriptivo.

En el caso, el plazo quinquenal era coincidente con el legislado en la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su Art. 278 indicaba que: “Las deudas de los contribuyentes que hubieren incurrido en mora en el pago de impuestos, tasas y cualquier otra especie de contribuciones adeudadas a la municipalidad, prescriben a los cinco (5) años de la fecha en que debieron pagarse”.

De esta manera, de conformidad a lo señalado y teniendo en cuenta que los vencimientos de las obligaciones tributarias en cuestión operaron luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (01/08/2015), a la fecha en que fue iniciada la demanda (28/12/2018), la pretensión de la ejecutante por las sumas adeudadas de los periodos 8 a 12 del año 2015, 2016, 2017 y 1 a 10 de 2018 no se hallaba prescripta.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

1º) REVOCAR PARCIALMETE la sentencia de fecha 08/03/2023, por cuanto corresponde HACER LUGAR parcialmente a la prescripción opuesta por el demandado, por los periodos 2012 (1 a 12) y 2013 (1 a 12) y mandar llevar adelante la ejecución contra el Estado Nacional por esas sumas reclamadas no prescriptas, más los intereses legales.

2º) Las costas, en ambas instancias, se imponen a la demandada sustancialmente vencida (Arts. 68, 1er. Párrafo, 279 y 558 del CPCC).

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 24/13 y ley 26.856) y devuélvase.

JUAN PABLO SALAS MARCOS MORÁN  
MARCELO DARÍO FERNÁNDEZ  
MATIAS JOSÉ SAC  
SECRETARIO DE CAMARA